Imprimir

En el marco de las relaciones Norte-Sur, los gobiernos de Colombia siempre han sido obsecuentes y sumisos ante las imposiciones o "sugerencias" de los países del Norte, en particular las de los Estados Unidos. Es decir, históricamente hemos sobrellevado unas indignas relaciones de dominación, dadas las maneras como se manejan los asuntos internos y los superiores intereses del Estado colombiano.
Con los Estados Unidos, un importante socio comercial, los presidentes colombianos han actuado con enorme docilidad, a pesar de que algunos buscaron en el multilateralismo sacudirse un poco de la presión que diversos gobiernos americanos ejercen sobre Colombia en materia comercial (cumplimiento de los compromisos con el TLC), de lucha contra el narcotráfico y la extradición de nacionales de manera unilateral, el respeto a los DDHH asociado a la entrega de ayuda militar y todo asunto que obviamente convenga a los intereses del gran país del Norte.

Con el regreso de Uribe al poder, en "los huesitos y las carnitas"[1] de Iván Duque Márquez, la mansedumbre[2] del primero frente a los intereses americanos es hoy el principio ético-político que guía y orienta la errática política internacional y la diplomacia del segundo.

A pesar de haber sido elegido presidente de la República, sectores amplios e importantes de la opinión pública concentrada en las grandes ciudades capitales, no reconocen a Iván Duque Márquez como tal. Por el contrario, parecen preguntarse lo mismo que en su momento la BBC News se preguntó a través del titular "*Colombia's new president Iván Duque: Puppet o rock star*?"[3]

Por encima de esa negativa representación social el presidente Duque continúa ejerciendo el poder presidencial, guiado, muy seguramente, por los resquemores y odios que desde siempre ha expresado Uribe Vélez alrededor del proceso de paz y más aún, frente a lo acordado en Cuba. Incluso, no se puede descartar la orientación que diera en su momento el sancionado ex ministro, Fernando Londoño Hoyos, quien dijo "*que el único objetivo del Centro Democrático es hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final*"[4].

Y de la misma manera como su mentor mantuvo su postura genuflexa frente a los norteamericanos, Duque no podía honrarlo de otra manera que manteniendo la histórica e indigna postura asumida por los gobernantes colombianos. Finalmente, para el actual mandatario de los colombianos, "*Uribe sigue siendo su presidente eterno*".

En lo que va corrido del gobierno de Duque son varios los hechos que dan cuenta y confirman la histórica sumisión de los mandatarios colombianos frente a los intereses norteamericanos. El primero de estos tiene que ver con la política antidroga y el compromiso de la actual administración de volver al uso del glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito, lo que implicaría desconocer lo acordado en el Tratado de Paz en esa materia y que se pretendió cumplir con el programa de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

Duque viajó a los Estados Unidos a escuchar los reclamos del presidente Trump, quien después, tempranamente, evaluaría muy mal los esfuerzos de su gobierno en esa materia. Es allí donde nace y se ancla la presión indebida que viene ejerciendo el gobierno americano con el retiro de las visas a magistrados de las altas Cortes que deberán o han tomado decisiones sobre asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico (incluye, por supuesto, el espinoso asunto de la extradición).

Visa USA

Los colombianos deben saber que el Estado colombiano, en el marco de lo acordado en La Habana entre el Gobierno de Santos y las antiguas Farc-Ep, firmado en el teatro Colón de Bogotá, ratificado en el Congreso después del malogrado plebiscito por la paz (2016) y avalado por la Corte Constitucional, asumió el compromiso de enfrentar la problemática de los cultivos de uso ilícito a través de la sustitución manual y una política agraria de claro beneficio para el campesinado que hoy cultiva coca para poder sobrevivir. El conflicto de intereses estaba, entonces, planteado. Asperjar los campos con glifosato, a pesar de las dudas científicas que circulan en torno a sus efectos en la salud humana y en los ecosistemas, no parece ser una opción aceptable para los Estados Unidos, país acostumbrado a imponer su agenda antidrogas a Colombia, por ser este uno de los

principales cultivadores de coca y proveedor de base de narcóticos.

El apoyo que al proceso de paz brindó el entonces presidente Obama contrasta con la política hostil del gobierno de Trump frente a lo acordado en La Habana. Postura que, por supuesto, está alineada con la asumida por Iván Duque Márquez quien intentó ocultar su oposición al Acuerdo Final II, con frases como "ni trizas, ni risas", que hacía alusión a su clara indisposición frente al modelo de justicia transicional adoptado en la negociación política adelantada entre el Estado y las Farc-Ep.

Su animadversión contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en general, contra todo lo que el Acuerdo Final le exige y le obliga a cumplir como Jefe de Estado, quedó demostrada el día en que, a través de una alocución[5], dio a conocer seis objeciones[6] al proyecto de ley estatutaria (PLE) de la JEP con las que buscó minar la confianza de los guerrilleros en el Estado y hacer trizas el Acuerdo Final desconociendo las ya avaladas conexidades entre los delitos sexuales y el narcotráfico y las dinámicas del conflicto armado interno.

Expuestas públicamente las objeciones al PLE, a pesar de que se había comprometido a no hacerlo, según el diario El Colombiano[7], Duque Márquez se alineaba de esta manera con los intereses del gobierno de Trump. Este último, entonces, daría un paso definitivo: presionar a los magistrados de la Corte Constitucional (CC) que deberán tomar una decisión en torno a si autorizan o no el uso del herbicida para atacar a los cultivos de coca que crecen en varias zonas del país. Y una forma de ejercer presión es el retiro de las visas para entrar a territorio norteamericano. Se trata de una especie de *nueva condena moral*, que hace aparecer como indignos e incluso, como enemigos, a aquellos ciudadanos del mundo que por una decisión que, aunque discrecional, viene claramente cargada de una intención de presionar o castigar a quienes osen tomar decisiones, judiciales en este caso, claramente opuestas a los intereses norteamericanos.

En todo ese asunto del retiro de las visas a magistrados[8] de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deberán tomar decisiones en torno a la aplicación del glifosato y la ya tomada por el magistrado de Eyder Patiño en el caso de un indígena que, pedido en

extradición, esta fue negada bajo el criterio de que ya había sido juzgado por la jurisdicción indígena, queda claro que una parte del Régimen colombiano, esto es, la Justicia, recibe el mismo tratamiento hostil que los EEUU viene dando contra miembros del régimen[9] de Maduro Moros.

En esa línea, para el gobierno de Donald Trump, los magistrados de las altas Cortes son "enemigos", de allí que el primer paso para atacarlos, por lo menos "moralmente", sea retirándoles los visados[10]. Pero lo que más llama la atención es el silencio del Gobierno de Duque, quien ha servido de punta de lanza para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, con la anuencia de los miembros del Grupo de Lima. Una prueba más, de la docilidad de un mandatario colombiano que, a pesar de la evidencia, guarda silencio frente a la intromisión en asuntos internos, por parte de los Estados Unidos.

Resulta a toda luz inconveniente que el país del norte, con la complacencia de Iván Duque en su calidad de Jefe de Estado, eleve al estatus de "enemigos de los Estados Unidos" a altos operadores judiciales que hacen parte del aparato de justicia colombiano. Esa intromisión no solo debe asumirse como una presión indebida en las funciones autónomas y soberanas de la justicia colombiana, sino como una intrusión en asuntos del Estado colombiano.

La postura hostil de los EE. UU., a través de su embajador Kevin Whitaker, guarda estrecha relación con la intención manifiesta de Uribe, del llamado "uribismo" y del Centro Democrático (CD), de romper el equilibrio de poderes y por ese camino generar una crisis institucional que los lleve a imponer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)[11], única salida que les queda para intentar retirarle el carácter constitucional al Acuerdo Final II.

Hay que decir entonces que tan inaceptables son las presiones de los EE. UU. a las altas Cortes, como inadmisible el silencio[12] cómplice del Gobierno de Iván Duque. Y huelga indicar que el retiro de los visados a los magistrados debe entenderse y asumirse como una abierta negación del Gobierno estadounidense a lo acordado en La Habana y por lo tanto, a su intención de oponerse a la construcción de una paz estable y duradera.

Pasados ya cuatro o más días desde el anuncio de la Embajada Americana de retirar los visados a específicos magistrados de las altas Cortes, el mutismo del primer mandatario claramente manda este mensaje: el gobierno de Duque no solo legitima la presión política ejercida por el Departamento de Estado, sino que confirma su alianza con el país del Norte, para hacer trizas el Acuerdo Final.

Eso sí, con el respaldo que dio la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez a las medidas "discrecionales" de la Embajada Americana, se deberá tomar como la postura oficial del Gobierno. El embajador Kevin Whitaker emitió un comunicado en el que señala que "*Estados Unidos y Colombia tienen una larga historia de diálogos abiertos y sinceros. Nuestra misión diplomática es representar los intereses de los Estados Unidos ante los interlocutores colombianos. Al hacerlo, reconocemos, valoramos y respetamos la soberanía de Colombia y lo esencial de sus instituciones democráticas. Valoramos especialmente la relación que hemos construido durante tres décadas con los valientes hombres y mujeres de la rama judicial colombiana, que trabajan incansablemente y con integridad para garantizar el Estado de derecho. Nuestra cooperación judicial ha dado resultados concretos a ambas naciones. Apreciamos nuestro diálogo continuo*"[13].

Sin duda, estamos ante un discurso melifluo que esconde realmente las intenciones del gobierno americano de unirse a los agentes de poder que, en Colombia, a toda costa quieren hacer trizas el Acuerdo Final II.

Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Foto obtenida de: Google News

[1] Expresión que la volvió popular el propio Uribe cuando mandó- no gobernó- en Colombia entre 2002- 2010.

[2] Mansedumbre que bien se puede explicar por la información que las agencias de

investigación criminal de los Estados Unidos han recolectado de tiempo atrás del señor Álvaro Uribe Vélez, catalogado en su momento, por el Consejo de Estado de los EE.UU, como el Narcotraficante número 82.
Véanse: https://www.semana.com/opinion/articulo/el-narcotraficante-numero-82-opinion-de-joaquin-robles/3946903; https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/; https://www.nytimes.com/es/2018/05/25/cables-uribe-narcotrafico-colombia/ Consulta: 11/05/2019. Docilidad que contrasta con el recio carácter y la violencia física y verbal con la que suele referirse a sus detractores, a quienes ha catalogado como “sicarios morales, guerrilleros vestidos de civil y amigos del terrorismo”.

[3] Véase: https://www.youtube.com/watch?v=7uSFgBlx-mI A partir del 0,40 al minuto 1,30

[4] Véase:
https://www.telesurtv.net/news/Fernando-Londono-llama-a-acabar-maldito-acuerdo-con-FARC-EP-20170507-0016.html

[5]
Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/03/lo-dicho-y-lo-no-dicho-por-duque-en-su.html

[6] Véase: https://www.sur.org.co/trapisondas-e-institucionalidad/

[7]
Véase: https://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/gobierno-de-ivan-duque-no-objetara-ley-estatutaria-de-la-jep-HH10245121 “Al tiempo que se consultó al diario El Colombiano, se hizo lo mismo con los portales de Semana y El Espectador. En ambos no se registraba la versión ya publicada por el periódico regional antioqueño. A las 2 y siete minutos de la tarde del lunes 18 de febrero, los portales de Semana, El Espectador y de El País de Cali, no registraban el hecho noticioso que El Colombiano de manera temprana ya había alojado en su portal web”.

[8] El rechazo de las altas cortes, incluida la JEP, no se hizo esperar.

Véase: https://www.elheraldo.co/colombia/corte-suprema-rechaza-presiones-magistrados-630520

[9]
Véase: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/412525/trump-maduro-visas-funcionarios-venezuela-crisis

[10] La cancelación de las visas o de los visados de entrada a los Estados Unidos adquieren importancia no solo por motivos turísticos, familiares que residen o estudian en ese país, sino por cuestiones de inversiones en bienes raíces y demás. Es decir, el retiro de los visados es una herramienta de persecución económica a la que apelan los EE.UU para golpear a sus "enemigos".

[11]
Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/04/los-riesgos-de-una-asamblea-nacional.html

[12] No se puede descartar que en el episodio de las recientes interceptaciones a los teléfonos de varios magistrados estén detrás organismos de seguridad de los Estados Unidos que suelen contar con el apoyo de sus homólogos colombianos. Recuérdese que la Fiscalía colombiana sabía de las interceptaciones, pero solo lo informó cuando fue los magistrados solicitaron al propio organismo si adelantaba alguna operación en ese sentido. El organismo de investigación de Colombia explicó que "detrás de las interceptaciones ilegales estaba una empresa criminal". Y no se puede olvidar que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez es un declarado enemigo de la JEP y del proceso de paz.

[13] Comunicado que circuló ampliamente por las Redes Sociales. Tomado de https://www.semana.com/nacion/articulo/embajada-de-estados-unidos-se-pronuncia-sobre-cancelacion-de-visas-a-magistrados/614417